

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

| | |
|--------------------|---|
| PROCESO | APREHENSIÓN Y ENTREGA DE GARANTÍA MOBILIARIA |
| DEMANDANTE | RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL |
| DEMANDADO | ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GALVIS |
| ACTUACIÓN | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| PROCEDENCIA | JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN y JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA |
| RADICADO | 05001 22 03 000 2023 00439 00 INTERNO 2023-043 |
| PROVIDENCIA | AUTO INTERLOCUTORIO N° 186 |
| DECISIÓN | DIRIME CONFLICTO DETERMINANDO LA COMPETENCIA EN EL JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA |
| MAGISTRADA PONENTE | MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO |

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Se dirime por el presente proveído, el conflicto negativo de competencia suscitado entre el **JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN** y el **JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA**, respecto del trámite especial de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria, promovido por **RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL** en contra del señor **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GALVIS**.

I. ANTECEDENTES

Actuando a través de apoderado judicial, la sociedad **RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL**, presentó ante los juzgados civiles municipales de Medellín, solicitud de aprehensión y entrega de la garantía mobiliaria, en contra del señor **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GALVIS**.

El reparto correspondió al **JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN**, Despacho que mediante providencia del 13 de julio de 2023, decidió rechazar la demanda por falta de competencia, con sustento en que

el domicilio del demandado es el Municipio Girardota (Antioquia) y *“por tanto es allí donde el vehículo objeto del presente proceso circula”*, considerando que el competente para conocer del asunto era el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA, a donde ordenó remitir las diligencias (Archivo digital 05).

Efectuada la anterior remisión, el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA, también se declaró incompetente para conocer del asunto, proponiendo en consecuencia conflicto negativo de competencia, argumentando que no se puede confundir la dirección para recibir notificaciones con el domicilio; además, en asuntos como el presente *“donde en la demanda se especificó que el «vehículo objeto de garantía se puede localizar en cualquier ciudad del territorio nacional», por tratarse de bien mueble la Corte Suprema de Justicia ha optado por dejar al criterio del demandante la circunscripción territorial en que habrá de ejercer su derecho de acción”* (Archivo digital 07).

Recibido el expediente en el Tribunal, es procedente resolver de plano el conflicto suscitado entre las referidas dependencias judiciales, conforme lo manda el artículo 139 del Código General del Proceso, previas las siguientes.

II. CONSIDERACIONES

1. Corresponde a esta Magistratura, definir el conflicto suscitado entre los JUZGADOS CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN y PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 139 del Código General del Proceso, por tratarse esta Corporación del Superior Funcional común a las dos dependencias judiciales aludidas.
2. La necesidad de distribuir la función de administrar justicia entre distintos órganos judiciales determina la formulación de reglas legales,

tendientes a satisfacerlas, y es precisamente en este punto en el cual cobra importancia el concepto **competencia**.

La noción de **competencia** viene en este sentido a integrar y concretar el amplio ámbito de atribuciones que es circunstancial a la idea de potestad judicial; ello por cuanto una vez se ha establecido que el conocimiento de determinado tipo de petición corresponde a los órganos judiciales del Estado, la regla de competencia interviene para determinar y asignar de forma específica a cuál de todos los órganos judiciales dispuestos corresponde el conocimiento de la causa. No cabe duda que la competencia guarda íntima relación con la garantía procesal de legalidad del juez y específicamente con el principio de juez natural.

Esta garantía se concreta en el establecimiento de reglas claras que permitan al justiciable conocer el sujeto que habrá de estar encargado de conocer y resolver cada uno de los tópicos materia de decisión; para ello, la competencia se asigna por normas imperativas, **contentivas de reglas de orden público e interés general que sean inmodificables, improrrogables indelegables y susceptibles de sanción ante vulneración mediante la consagración de la nulidad procesal**.

De manera que para asignar la aptitud legal para el conocimiento de un proceso determinado, el legislador acude a los denominados *factores* de competencia, dentro de los cuales se encuentran el **objetivo** que hace referencia a la naturaleza de la controversia, denominado también como competencia por materia; el **subjetivo** de acuerdo a la calidad de las personas que intervienen en la Litis; el **territorial**, en virtud del que se precisa a cuál de los distintos despachos judiciales de igual categoría existentes en el territorio nacional, corresponde atender el ruego de tutela jurisdiccional; y el **funcional** que atiende a las funciones asignadas a cada Juez de la República.

3. En el asunto *sub examine* está claro que lo pretendido es promover la acción especial de aprehensión de garantía mobiliaria, trámite novedoso

introducido de forma reciente en nuestra legislación, lo que también ha suscitado discusiones en cuanto al factor de competencia, especialmente en el ámbito territorial y los foros que en dicha materia operan.

Como se anteló, el tema ha motivado diversas posiciones, que incluso han variado en el tiempo al interior de nuestro máximo órgano de decisión civil, siendo la posición más actual y consolidada de dicha Corporación, aquella según la cual el juez con competencia territorial para conocer asuntos como el discutido es aquel del lugar **donde se ubica el bien**, desprendiéndose de allí varias posibilidades dado que se trata de un bien mueble, así: (i) que en el contrato base de la solicitud se establezca el lugar donde debe circular el bien, caso en el cual se debe atender a dicha disposición y, por ende, sería competente el juez de ese lugar determinado para la circulación; (ii) que en el contrato se disponga que el bien debe circular en el domicilio del deudor, donde la competencia estaría dada al juez del lugar de dicho domicilio, pero, no en razón al domicilio sino al lugar de circulación; (iii) que en el contrato se pacte que el bien puede circular en todo el territorio nacional, siendo entonces decisión de la parte demandante elegir el lugar del territorio nacional donde presentará la solicitud y (iv) que en el contrato no se señale dónde debe circular el bien y en la demanda se informe un lugar donde se conoce circula éste, evento en el que será competente el juez del lugar donde se afirma circula el bien y (v) que en el contrato no se indique dónde debe circular el bien y en la demanda se informe que lo hace en todo el territorio nacional, evento en el que la parte demandante puede presentar la solicitud ante cualquier juez municipal del territorio nacional.

El entendimiento de este tema, se desprende del análisis, entre otras, de las siguientes providencias que se citan *in extenso* por su pertinencia, emitidas por los Magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, así:

AC2162-2023 M.P. FRANCISCO TERNERA BARRIOS:

“3. De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral 1º constituye la

regla general. Esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado». Empero, tratándose de asuntos suscitados, entre otros, en los que se «ejerciten derechos reales», conforme al numeral 7º del precepto en comento, **es competente de modo privativo el funcionario judicial del lugar donde se hallen ubicados los bienes.**

4. Tal circunstancia fija la competencia para conocer de la comentada acción. Ello pues, al tratarse este de un proceso en el cual se pretende la aprehensión y posterior entrega del vehículo de propiedad de la demandada sobre el cual pesa una garantía mobiliaria, es la precitada regla aplicable. **De suerte que, la competencia radica privativamente en los jueces de la jurisdicción territorial donde se ubica el bien objeto del gravamen,** descartándose desde cualquier punto de vista la aplicación de otro foro.

Por tanto, emerge del cruzado análisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Oralidad de Medellín. Por supuesto, se destaca que, en estos casos, por la calidad del bien mueble resulta razonable que no se tenga con exactitud la ubicación de este o que esta cambie en el curso del proceso. Es por ello que, en este tipo de situaciones, esta Corporación ha optado por dejar al criterio del demandante la circunscripción territorial en que habrá de ejercer su derecho de acción. Esto pues, se reitera que «la manifestación realizada en el libelo genitor por parte de la sociedad convocante evidencia la variabilidad de localización del bien mueble objeto de la aprehensión, lo cual le permite instaurar la acción ante cualquier autoridad judicial del territorio nacional” (Resaltado intencional).

AC1678-2023 M.P. MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ:

“Así las cosas, al tratarse de solicitudes de aprehensión y entrega como la que dio origen a este trámite, en AC2218-2019 la Sala indicó:

(...) ciertamente se está en ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su crédito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro está, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual reclama la tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial, que de manera más cercana encaja en el caso, es la del numeral 7º del referido artículo 28, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de economía procesal e inmediatez, puesto que el juez que mejor y más fácil puede disponer lo necesario para llevar a término lo pretendido, sin duda, es el del sitio en el que se halle el bien afectado (negrilla ajena).

De hecho, en una decisión más reciente se explicó (AC271-2022):

[a]hora bien, siendo evidente que la solicitud de aprehensión y entrega promovida entraña el ejercicio del derecho real de la prenda (art. 665 del C.C.) constituida por el deudor a favor de la sociedad accionante sobre un automóvil, es claro que el asunto corresponde de manera **“privativa” al juzgador del sitio donde se halla el rodante.**

3.- Para el caso concreto se advierte que, independientemente de cuál sea el domicilio de la señora Luz Yarelis Montes Tellez, lo que permite establecer la competencia en este asunto es el **lugar de ubicación del automotor**, al ser el factor «privativo» para dirimir el conflicto (numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso).

Siendo ello así, **de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del «CONTRATO DE PRENDA (GARANTÍA MOBILIARIA) ABIERTA Y SIN TENENCIA», en lo que respecta a la ubicación del automotor, la deudora se comprometió llanamente a mantenerlo «dentro del territorio Colombiano», sin especificar ningún sitio en concreto.**

En situaciones como esta, en la que no se define el lugar de ubicación del bien, la Corporación ha decidido dejar al arbitrio del demandante la ciudad o el municipio en que quiera ejercitar su derecho de acción” (Resaltado intencional).

AC3530-2023 M.P. LUIS ALONSO RICO PUERTA:

“Acorde con el precedente de la Sala, en tratándose de solicitudes de aprehensión y entrega como la que dio origen a este trámite, «ciertamente se está en ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su crédito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro está, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual reclama la tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial que de manera más cercana encaja en el caso, es la del numeral 7º del referido artículo 28, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de economía procesal e intermediación, puesto que el juez que mejor y más fácil puede disponer lo necesario para llevar a término lo pretendido, sin duda, es al del sitio en el que se halle el bien afectado» (CSJ AC2218–2019, 10 jun.).

Ahora, en su libelo introductor, la demandante Bancolombia S.A., señaló expresamente que el vehículo objeto de prenda se puede desplazar por cualquier zona del país, lo cual es razonable, dada su naturaleza de bien mueble.

Por ello, en asuntos de contextos parecidos se ha reconocido que,

«(...) en el literal i) del párrafo sexto del contrato de prenda abierta sin tenencia, la deudora garante se obliga a “[m]antener el vehículo dentro del territorio de la República de Colombia”, sin que en la solicitud de entrega voluntaria de dicho bien, ni en alguna otra de las documentales allegadas se estipule obligación en contrario que pueda generar confusión al respecto, lo que irroga al acreedor la liberalidad para solicitar la aprehensión y entrega del bien, en múltiples circunscripciones (...). Al respecto, precisó recientemente la Sala en un caso con contornos similares, que “si se afirma que el lugar de ubicación del bien es el “territorio de la República de Colombia”, esta es una categoría integrada por múltiples circunscripciones territoriales, por tanto, tratándose de un ‘rodante’, cualquiera de ellas puede ser elegida por el actor, conforme a la parte final de la regla 28-7 del Código General de Proceso” (AC4049-2017)» (CSJ AC2218–2019, 10 jun.).

En consecuencia, resultaba improcedente que el funcionario judicial a quien inicialmente se le asignó el trámite declinara conocerlo, dado que, (i) su competencia viene establecida por lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 28 del Código General del Proceso; y, (ii) la sociedad actora denunció la mutabilidad de la ubicación del bien objeto de la aprehensión, lo que (prima facie) le permite demandar en cualquier sede de la circunscripción nacional, a su elección –al menos mientras se establece, con absoluta claridad, un único paradero del automotor sobre el que versa la actuación–.

Aunado a todo lo anterior, no se podía obviar que en el «contrato de garantía mobiliaria prioritaria de adquisición sobre vehículo (prenda sin tenencia)», se estableció, en uno de los apartados de la cláusula sexta que «El Garante debe mantener el vehículo dentro de la República de Colombia.», sin que se delimitara de manera expresa y consensual, un domicilio específico de permanencia del vehículo en el territorio de la República, lo cual imponía la conclusión que antes se indicó». (Resaltado intencional).

AC3573-2023 M.P. OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE:

*“De ahí se concluye que las actuaciones de «aprehensión y entrega de bienes dados en garantía» incumben al funcionario civil del orden municipal, por lo que es necesario definir qué parámetro prima, si el relativo al «ejercicio de derechos reales» o el indicado para «diligencias especiales». No obstante, como el procedimiento examinado no encaja, de forma exacta, en ninguno de ellos, habrá de colmarse el vacío, de conformidad con el artículo 12 ejusdem, con el canon que regule una figura afín, por lo que como se ha indicado con insistencia y se precisó en CSJ AC3857-2022 **«se concluye que tales diligencias competen a los juzgados civiles municipales o promiscuos municipales de lugar donde estén los “muebles” garantes del cumplimiento de la obligación».***

Lo anterior quiere decir que es un requisito indispensable al elevar la solicitud en ese sentido que el promotor indique con precisión y claridad el lugar donde se encuentran los activos sobre los cuales recaerá la medida o su desconocimiento, a fin de poder concluir con certidumbre a quién correspondería atenderla, ya fuera por el factor indicado o algún otro en su defecto.

Para tal propósito no es suficiente con citar apartes de los convenios abstractos de los pactantes, puesto que la asignación depende de la situación actual y toda vez que las eventuales e imprecisas manifestaciones de «circulación nacional» no pueden ser de recibo, como si con ello se facultara al acreedor a proceder a su libre arbitrio en lesión del debido proceso del deudor.

Por lo tanto, en caso de que exista imprecisión sobre el particular, es menester que la primera autoridad a la que arribe agote los mecanismos necesarios a fin de dilucidar los aspectos oscuros del petitorio, antes de desprenderse del mismo, ya que como se indicó en CSJ AC5186-2021, reiterado en CSJ AC797-2023, si

(...) el criterio de escogencia luce impreciso y tampoco halla respaldo en alguno de los soportes arrimados al plenario, ello significa que era deber de quien recepcionó el caso en un comienzo exigir la precisión correspondiente en aras de establecer certeza respecto del parámetro llamado a definir la competencia por el factor territorial, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Código General del Proceso.

3.- En el caso particular, si bien en la cláusula cuarta del contrato de prenda sin tenencia y garantía mobiliaria suscrito, se limitó la ubicación del vehículo a «la ciudad y dirección atrás indicados», se observa que el espacio para consignar esa información se dejó vacío, lo que significa que no se asignó ciudad ni dirección para su localización” (Resaltado intencional).

4. En el caso bajo examen, extrañamente, los jueces involucrados en el conflicto no analizaron el contenido del contrato base del reclamo, donde se advierte que se estableció en la cláusula CUARTA “UBICACIÓN. El (los) vehículo(s) descrito(s) en la cláusula primera y objeto de esta prenda y garantía mobiliaria, permanecerá(n) en la ciudad y dirección atrás indicados. EL (LOS) CONSTITUYENTE (S) Y/O DEUDOR (ES) no podrá(n) variar el sitio de ubicación del(los) vehículo(s) dado(s) en prenda, sin previa autorización escrita y expresa de RCI COLOMBIA, pero gozará(n) del uso permanente del (los) mismo(s) para efectos de desarrollar su actividad...” y si se observa la ciudad indicada de forma precedente al clausulado es GIRARDOTA-ANTIOQUIA, lo que implica que el juzgado competente para conocer este asunto es el PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA, pero no por las razones indicadas por el JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN sobre domicilio y dirección de notificación del demandado, sino dado el pacto claro establecido en el contrato.

Pertinente resulta advertir que, aunque en la solicitud de aprehensión la apoderada de RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL afirmó que el bien objeto de garantía no tiene limitación para su desplazamiento por todo el territorio nacional, y por ello le resultaba posible elegir el lugar de presentación de la acción, lo cierto es que, en el contrato se estableció de forma clara y contundente un municipio específico de ubicación del bien, como se detalló en precedencia, siendo entonces

competente el juez de esa municipalidad y no cualquier funcionario del territorio nacional.

III. CONCLUSIÓN

Viene de lo dicho que, dado que el contenido del contrato de prenda sin tenencia y garantía mobiliaria se estableció como lugar específico de ubicación del vehículo objeto de la litis el Municipio de Girardota-Antioquia, la autoridad judicial competente para conocer de la demanda que encabeza estas diligencias, es el **JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA**.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,**

IV. RESUELVE

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado, **DECLARANDO** que el competente para conocer del asunto referido en la motivación, es el **JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA**, al cual se ordena remitir las presentes diligencias, una vez adquiera firmeza este auto.

SEGUNDO. COMUNICAR la decisión adoptada al **JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:
Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 007 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f495dcb8287fb0204f1e25595b072b244e112b6d5c7ca6e2eeec10116ca56078**

Documento generado en 15/12/2023 09:07:49 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>